

La ONU condenó la masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia

'Vergüenza para la humanidad'

Los organismos internacionales siguen conmocionados por lo que consideraron otro hecho de "barbarie" en Colombia. ONG denuncian que ya son 130 los campesinos de esa comunidad asesinados.

REDACCIÓN JUDICIAL

La última semana la comunidad internacional se horrorizó con la masacre perpetrada en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia), en la que las autoridades identificaron los cuerpos descuartizados de 8 personas, entre ellos el del líder comunitario Luis Eduardo Guerra, cuatro menores de edad y un bebé.

El suceso tomó proporciones internacionales luego de que la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, y el sacerdote jesuita, Javier Giraldo, denunciaron que miembros del Batallón 33, pertenecientes a la Brigada 17, "habrían sido los responsables de este horrendo crimen", ocurrido el 22 de febrero. Varios reinsertados, sin embargo, aseguran que los testimonios de Cuartas y el padre Giraldo son un montaje para hacerle daño al Ejército. De todas formas, las dudas sobre los posibles autores materiales y las causas de este asesinato colectivo están en el orden del día en los organismos internacionales que tienen sede en Colombia.

Por eso esta semana que pasó fue Troya. Después de las declaraciones de la ex alcaldesa y del sacerdote, de inmediato el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, descalificó las acusaciones señalando que la Fuerza Pública "está tranquila en que no fue ella la que cometió estos atropellos, y está prestándole toda la colaboración a la Fiscalía para que esclarezca lo sucedido".

Pero independientemente de quién o quiénes fueron los responsables de los hechos, para la ONU es un hecho que la masacre sucedida en la Comunidad de Paz de Apartadó "es una vergüenza para la humanidad".

Dicha comunidad estaba protegida por medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con las que se pretendió buscar un blindaje para que sus habitantes pudieran sobrevivir en medio del conflicto armado. La determinación tomada por la OEA obedeció, en su momento, a que según denuncias de algunas ONG, en la última década han sido asesinados selectivamente 130 personas de esa comunidad, conformada por cerca de 2.200 familias.

"Es desconcertante que una comunidad con tanto reconocimiento internacional y con una medida de protección especial solicitada hace un año por la Corte Constitucional, sufra un ata-

Funeral de las ocho víctimas de la masacre. Entre ellas la del líder Luis Eduardo Guerra y su familia (en la foto).

que de semejante crueldad", protestaron las Brigadas Internacionales de Paz.

Pero las cosas no quedaron sólo en las denuncias y la controversia. Una comisión de investigadores de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo fue atacada, esta semana por desconocidos, dejando como resultado la muerte del policía Roger Jaraba Álvarez. El carro en el que se movilizaba la comisión fue atacado con cohetes que impactaron a pocos metros del vehículo.

Y el ambiente está más agitado que nunca en la zona. Los campesinos tienen miedo de hablar. La propia Fiscalía aseguró que ha tenido problemas para reconstruir los hechos debido al silencio de los pobladores, quienes argumentan que el Estado los abandonó y que la justicia no ha querido investigar decenas de desapariciones y asesinatos en la zona.

Así las cosas, nadie quiere decir qué pasó. Los pocos que lo han hecho se sienten amenazados, ya que denunciaron a las autoridades que once campesinos más se encuentran desaparecidos y que temen que grupos parami-

litares estén detrás de estos hechos.

Naciones Unidas, por su parte, desplazó también una comisión al lugar para verificar las graves denuncias relacionadas por ONG de la zona. Luego de la visita, el director de la Oficina de Refugiados en Colombia, Roberto Meir, les solicitó a las autoridades que agilicen la investigación y se encuentren a los verdaderos responsables de estos hechos "para que nunca más se repitan estos actos de barbarie".

Algunos testigos insisten en responsabilizar a miembros del Ejército en la masacre ya que, según su versión, el 21 de febrero el líder Luis Eduardo Guerra, su hijo, su compañera y otra persona que estaba con ellos, fueron detenidos ilegalmente por hombres que se identificaron como soldados de la Brigada 17. De acuerdo con estas versiones, el Ejército realizaba una ofensiva contra las Farc y desde el 20 de febrero tenía presencia en las veredas Mulatos Medio, Las Nieves, Alto Bonito y La Balsa, lugares en donde se desarrollaron los hechos.

No obstante, el Ejército afirma que fueron las Farc las que cometieron esta nueva masacre

Reacciones

El defensor del Pueblo, Vólmir Pérez, le solicitó al vicepresidente Francisco Santos que, en virtud de "la gravedad de los hechos que ocurrieron en San José de Apartadó", convoque el Comité Especial de Impulso a las Investigaciones de Graves Violaciones de Derechos Humanos, para que brinde protección a los miembros de la comunidad y a los testigos de los hechos.

Por su parte, el director de la oficina de Refugiados en Colombia, Roberto Meir, solicitó a las autoridades "transparencia e independencia" para realizar esta "difícil investigación". Así mismo, les pidió que no estigmaticen a los habitantes de la Comunidad de Paz y que agilicen el proceso judicial para encontrar rápidamente a los responsables.

EL COLOMBIANO

que enluta al Urabá antioqueño, un territorio que se tiñó de sangre en la década de los noventa por cuenta de la guerra entre la guerrilla y los paramilitares.

Pocos días después de los hechos, Asonal Judicial repudió "los actos terroristas" que segaron la vida de ocho personas de la comunidad de paz. "Luis Eduardo Guerra, querido y respetado dirigente de la martirizada zona de Urabá, se ganó el reconocimiento de la comunidad internacional por su lucha incansable por obtener la paz". Y agrega más adelante: "La posición erguida y digna de Guerra fue suficiente para que meses antes tuviera que sepultar a su primera esposa y a uno de sus hijos, víctimas de los intolerantes enemigos de la paz, quienes dejaron en su vivienda una granada que explotó con ese saldo trágico".

Mientras tanto, la comunidad internacional se encuentra expectante y confundida. Y la investigación de la Fiscalía no parece avanzar como debería. Un argumento más para que la comunidad internacional proteste y exija responsables en este nuevo hecho de violencia en Urabá.